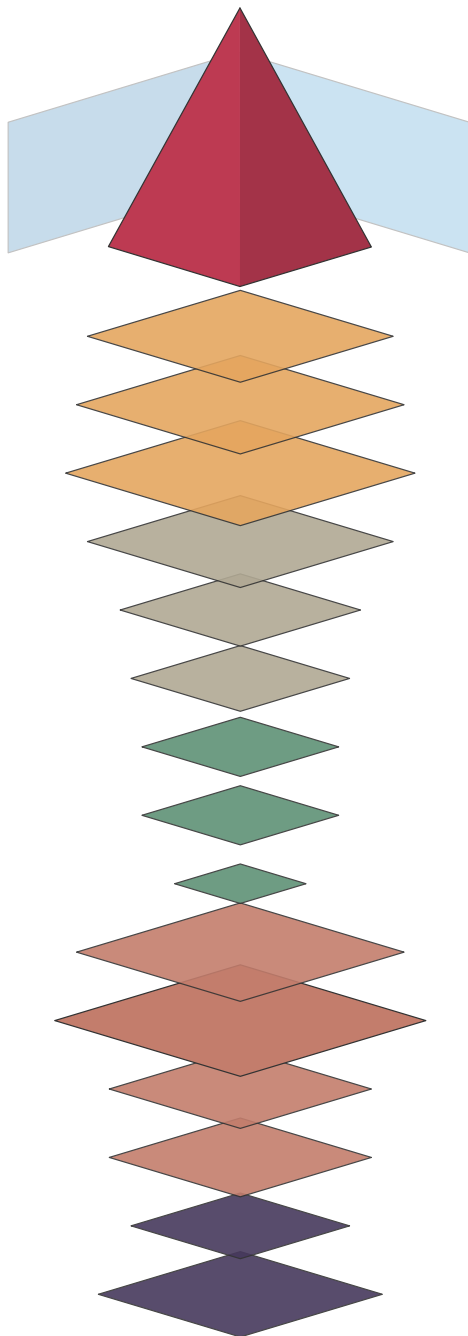



GUATEMALA




6,60
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

26.º de 193 países
 9.º de 35 países americanos
 4.º de 8 países de América Central


MERCADOS CRIMINALES **6,10**

TRATA DE PERSONAS	7,00
TRÁFICO DE PERSONAS	7,50
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	8,00
TRÁFICO DE ARMAS	7,00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	5,50
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	5,00
DELITOS CONTRA LA FLORA	4,50
DELITOS CONTRA LA FAUNA	4,50
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	3,00
COMERCIO DE HEROÍNA	7,50
COMERCIO DE COCAÍNA	8,50
COMERCIO DE CANNABIS	6,00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	6,00
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	5,00
DELITOS FINANCIEROS	6,50


ACTORES CRIMINALES **7,10**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	7,50
REDES CRIMINALES	6,00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	8,00
ACTORES EXTRANJEROS	8,00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	6,00


4,08
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA



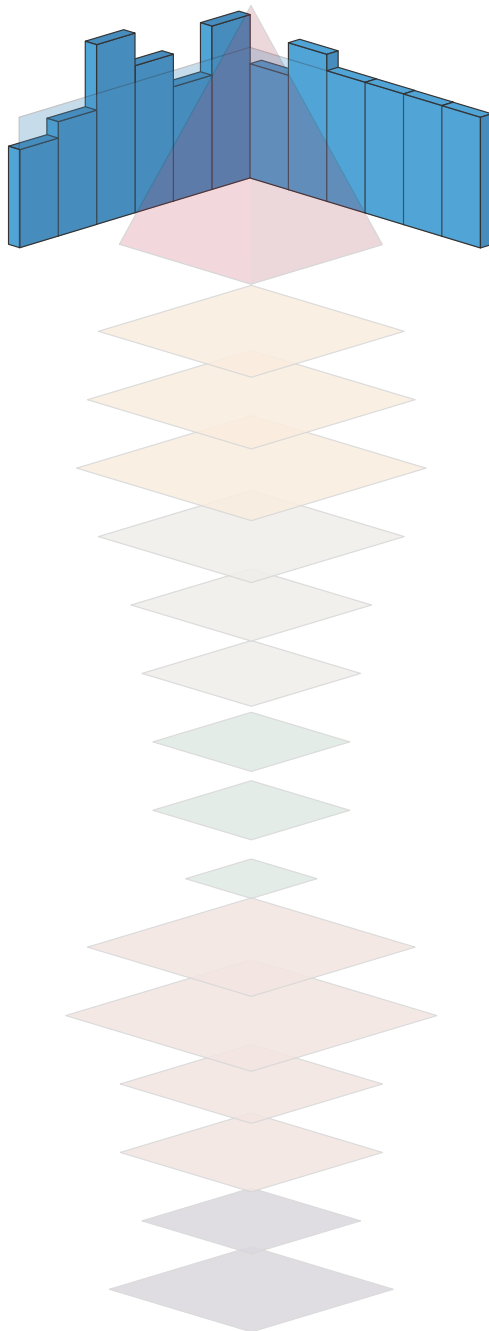
Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

 **GUATEMALA**



 **4,08**
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

127.º de 193 países
26.º de 35 países americanos
4.º de 8 países de América Central

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	3,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5,50
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	4,50
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	3,50
CUERPOS DE SEGURIDAD	5,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	3,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	4,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	4,00
PREVENCIÓN	4,00
ACTORES NO ESTATALES	4,00

 **6,60**
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

 MERCADOS CRIMINALES	6,10
 ACTORES CRIMINALES	7,10



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Guatemala es un país de origen, tránsito y destino de la trata de seres humanos. Las mujeres y los menores procedentes de toda América Central y, en menor medida, de Colombia y algunos países africanos son especialmente vulnerables a la explotación sexual y laboral en el país. Las víctimas nacionales o no ciudadanas suelen ser explotadas en los sectores agrícola, doméstico y textil, no solo en Guatemala, sino también en Belice, México y Estados Unidos. Guatemala tiene un historial de peonaje y trabajo forzado, especialmente entre las comunidades indígenas. Aunque el reclutamiento para el tráfico sexual o laboral no es tan lucrativo como el reclutamiento para el contrabando de personas, muchas formas de explotación en el país están vinculadas al movimiento de personas y pueden ocurrir durante o después del viaje de contrabando. Las zonas fronterizas entre Guatemala, Honduras y El Salvador se ven especialmente afectadas por el mercado de la trata de personas. Los traficantes suelen pertenecer a grupos delictivos locales bien organizados, que trabajan en cooperación con traficantes internacionales, sobre todo a lo largo de la frontera guatemalteca, y tienen conexiones con organizaciones de narcotraficantes.

El contrabando de personas en Guatemala suele ser una respuesta a la dificultad que experimentan las personas para acceder a visados y pasaportes, debido a su origen y a su ubicación remota. Muchos de los traficantes condenados proceden de comunidades indígenas y trabajan con otros traficantes y redes delictivas de México y otros países. La ubicación de Guatemala en una de las principales rutas entre América del Sur y América del Norte, así como los largos tramos de fronteras sin vigilancia, facilitan el tráfico de personas. Los traficantes de personas suelen estar relacionados con grupos delictivos bien organizados y los habitantes de algunas zonas rurales del altiplano guatemalteco han hecho del contrabando su medio de vida. Guatemala también es un país de destino para el contrabando de personas y los grupos delictivos y las autoridades corruptas facilitan su entrada. La falta de oportunidades laborales, la pobreza, el acoso patrocinado por el Estado, la violencia de las bandas y la búsqueda de una vida mejor han contribuido al creciente mercado del contrabando de personas.

La extorsión es una actividad delictiva omnipresente en Guatemala y ha ido en aumento en los últimos años, con miles de casos de extorsión denunciados cada mes. La extorsión se realiza a menudo mediante llamadas telefónicas y las víctimas incluyen a empresas, particulares e incluso presos. La pandemia de la COVID-19 ha dado

lugar a «grupos imitadores», que han ganado territorio en el mercado de la extorsión, centrándose en residencias privadas y particulares, en lugar de empresas, ya que las bandas han suspendido en gran medida sus actividades, debido a la ralentización económica. Los grupos delictivos utilizan a menudo la violencia y las amenazas para exigir los pagos e incluso los presos se ven obligados a pagar la entrada a las cárceles para evitar la violencia.

TRÁFICO

Guatemala sirve tanto de país de destino como de tránsito para el tráfico de armas, con varios puntos de entrada de AR-15 a lo largo de las principales rutas de tráfico. La expansión del mercado ilícito de armas puede atribuirse a factores como la guerra civil guatemalteca, la porosidad de las fronteras, la falta de control y la escasez de personal de las autoridades fronterizas. Las bandas criminales, que necesitan armas de fuego a menudo, se relacionan con traficantes de armas y las venden en los mercados negros locales. Se calcula que en Guatemala hay más de un millón de armas ilícitas, lo que provoca una violencia generalizada en todo el país, donde la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego. Las incautaciones de armas de fuego y munición han sido constantes a lo largo de los años. Mientras tanto, las leyes que regulan la tenencia de armas tienen normas más estrictas para poseer un arma, pero son más laxas cuando se trata de municiones, que a menudo se compran legalmente, antes de ser traficadas. El Estado carece de control sobre el mercado de armas y la Policía se centra principalmente en confiscar las armas ilícitas, en lugar de dismantelar la estructura del mercado. Además, Guatemala sirve de centro de distribución de armas ilícitas a El Salvador y Honduras.

El comercio de productos falsificados tiene notables consecuencias económicas en Guatemala, agravadas por la situación estratégica del país y por las condiciones sociales y económicas. La producción de prendas de vestir falsificadas y la venta de productos farmacéuticos también plantean problemas, siendo este último especialmente preocupante, ya que puede dar lugar al consumo de peligrosos medicamentos falsificados. Guatemala se considera una economía de procedencia para el calzado, la ropa, los artículos de cuero y los bolsos falsificados, en su mayoría importados de China, Corea del Sur, India y Turquía. Los productos falsificados se venden cada vez más en las redes sociales.

El comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales, principalmente productos del tabaco y bebidas alcohólicas, es un mercado delictivo moderado en Guatemala. La mayoría de los productos de tabaco de contrabando procedían de Panamá y entraban a través de Belice. También se han

encontrado en el país marcas de cigarrillos de contrabando procedentes de China y de India. El comercio ilícito tiene importantes repercusiones económicas para el Estado, que sufre pérdidas de ingresos fiscales.

MEDIOAMBIENTE

Los delitos contra la flora, en concreto el tráfico de palo de rosa, son frecuentes en Guatemala, debido a la gran demanda china. La tala ilegal y el tráfico de madera también se dan en varias regiones, a menudo vinculados a actividades de narcotráfico. Los indígenas se han quejado de la tala y empresas sin permisos se dedican a la extracción ilegal de pinos. También se trafica con flora viva, como el aloe y la tillandsia. Agricultores e intermediarios locales participan en las operaciones de tráfico de flora a través de redes organizadas de tráfico de palo de rosa. La escasez de recursos y la extrema pobreza de las zonas rurales también contribuyen a este comercio. La demarcación poco clara de la frontera entre Guatemala y Belice y la falta de cooperación transfronteriza dificultan la capacidad de las fuerzas de seguridad para combatir eficazmente los delitos relacionados con la flora. Además, el tema no es prioritario en Guatemala, lo que limita aún más los recursos contra el tráfico de madera de palma.

El tráfico de especies silvestres en Guatemala implica a grupos delictivos organizados, con conocimiento de las rutas y cooperación con autoridades corruptas. El movimiento transfronterizo y el comercio de especies entre países exigen grupos perfectamente organizados y las guacamayas rojas, los monos y los reptiles se encuentran entre las especies más traficadas. La mayor parte del tráfico de especies silvestres tiene lugar a lo largo de la frontera entre Guatemala y Belice, a menudo cometido por traficantes de palo de rosa. En el comercio participan agricultores e intermediarios locales, que venden los animales a compradores extranjeros. Aunque hay demanda de guacamayas rojas, los traficantes no parecen estar bien organizados a gran escala.

La minería ilícita es el delito contra los recursos no renovables más frecuente en Guatemala, con actores criminales extranjeros implicados en operaciones ilegales de extracción de jade. En algunas zonas, aldeas enteras están presuntamente implicadas en la extracción ilícita de jade, en colaboración con autoridades locales corruptas. También se ha informado de que las operaciones mineras legales hacen caso omiso de las normas de impacto ambiental y utilizan medios ilegales para controlar los problemas sociales.

DROGAS

Guatemala es el tercer productor de adormidera de América Latina y su comercio de heroína se concentra a lo largo de la frontera entre Guatemala y México. Los cárteles mexicanos se han expandido por Guatemala para cultivar adormidera y la heroína se destina principalmente a Estados Unidos. La

producción de adormidera es vista por muchos lugareños como un medio de vida lucrativo y provoca luchas entre las comunidades locales por el control del agua y de la tierra.

Además, Guatemala es un importante país de tránsito de cocaína, debido a su ubicación en una importante ruta de narcotráfico entre América del Sur y América del Norte. La cocaína entra en el país por tierra, mar y aire y es el principal mercado de drogas de Guatemala. Los actores criminales implicados incluyen a grupos mafiosos, en forma de cárteles de la droga. La corrupción es generalizada en el mercado y los cárteles de la droga y los narcos individuales penetran en los sistemas políticos, judiciales y policiales locales y nacionales. Se sabe que crean alianzas con actores estatales a todos los niveles. También se ha producido un aumento de las plantaciones de coca en el país en los últimos años, lo que ha quedado demostrado por el incremento de la erradicación de la coca y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, llevados a cabo por las fuerzas del orden. Esto indica que Guatemala se está convirtiendo en un país productor de cocaína, aunque en una medida limitada, en comparación con los principales países productores de cocaína de América del Sur.

Además, Guatemala es un país de origen y tránsito de cannabis. El mercado del país opera principalmente para consumidores nacionales y regionales. En las zonas rurales, el cultivo de marihuana está controlado por grupos transnacionales de narcotraficantes. Entre los actores criminales implicados en el mercado se encuentran bandas juveniles y otros grupos criminales más pequeños. Algunos niños también son obligados a vender marihuana en la escuela. Los delincuentes implicados en el comercio de cannabis suelen participar en otros mercados delictivos.

Guatemala es también un país tanto de origen como de tránsito para el comercio de drogas sintéticas. Los precursores químicos procedentes de otros países se transportan a México a través de Guatemala, para su procesamiento, aunque este también puede tener lugar en Guatemala. En el país se han detectado laboratorios de drogas sintéticas durante muchos años. La proximidad de Guatemala a México, su acceso a puertos marítimos poco controlados y la corrupción facilitan la aparición de laboratorios de drogas. Los grupos delictivos mexicanos, guatemaltecos y colombianos son los más importantes en cuanto a laboratorios clandestinos en la región, así como en la obtención de precursores químicos. Sin embargo, el tráfico de drogas sintéticas sigue siendo menor que el de cocaína o heroína en el país.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Guatemala ha experimentado un notable aumento de los ciberataques, sobre todo en forma de ataques de ransomware. Las organizaciones criminales se aprovechan de la falta de regulación y control de internet para cometer ciberdelitos.

En los últimos años se han registrado hackeos de sitios web con el dominio «.gt» y algunas empresas se han visto afectadas por la filtración de documentos que exponen la corrupción. En el 2022, el grupo de hackers conocido como Guacamaya Roja pirateó documentos confidenciales de un proyecto gestionado por una multinacional minera que operaba en el país. La compañía minera alegó que había sufrido un ciberataque y que se estaba llevando a cabo una campaña de desinformación contra la empresa.

Además, una nueva técnica conocida como crypto clipping está ganando popularidad en Guatemala. Este malware funciona alterando la dirección del beneficiario durante las transacciones de criptodivisas.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros son frecuentes en Guatemala y plantean riesgos sustanciales para su economía. Además, las acciones que impiden la independencia del Poder Judicial de Guatemala exponen al país a delitos financieros continuos y dificultan su capacidad para prevenirlos o combatirlos. En los últimos años, personas y empresas han sido condenadas por diversos delitos financieros, como fraude, evasión fiscal y malversación de fondos. La evasión fiscal es un problema importante y documentos filtrados han revelado que Guatemala es uno de los países de América Latina más utilizados para fines extraterritoriales por políticos, empresarios y particulares. La malversación también es motivo de gran preocupación, con funcionarios condenados por apropiación indebida de fondos de diversos proyectos.

ACTORES CRIMINALES

Los actores extranjeros, incluidos los cárteles mexicanos de la droga y las bandas criminales transnacionales, dominan el panorama delictivo de Guatemala. Los cárteles mexicanos controlan gran parte del tráfico de drogas en el país, colaborando con cárteles de la droga y grupos delictivos locales. Estos grupos delictivos internacionales colaboran sobre todo con sus homólogos locales en Guatemala, que es principalmente un país de tránsito para los mercados del narcotráfico. Mientras tanto, las redes delictivas locales participan en diversos mercados delictivos, como el cultivo de marihuana, adormidera y coca, la trata de personas, el secuestro y el blanqueo de dinero. Están formadas

por antiguos militares, policías, funcionarios públicos y narcotraficantes que trabajan con grupos de otros países centroamericanos. Las bandas criminales más pequeñas son conocidas por su violencia extrema, incluida la tortura, y su implicación en la explotación sexual y el tráfico de personas. Aunque las redes criminales carecen de medios para influir en el proceso democrático de Guatemala a escala nacional, se cree que han influido en las elecciones locales a la alcaldía.

Los actores corruptos integrados en el Estado apoyan los mercados delictivos de Guatemala, facilitando o participando directamente en operaciones ilegales. Participan en el tráfico de drogas, como el de cocaína y marihuana, y están influidos por narcotraficantes que utilizan su poder para influir en las elecciones locales, proteger los envíos de droga y garantizar la impunidad. Algunos agentes estatales, envalentonados por la supuesta inmunidad asociada a sus cargos, han creado sus propias operaciones de narcotráfico.

En Guatemala operan grupos de tipo mafioso, incluidos cárteles de la droga y bandas internacionales, que se dedican al tráfico de drogas, el tráfico de armas, el contrabando, la trata y el tráfico de personas, así como a la extorsión. Estos grupos están muy organizados y jerarquizados, cuentan con muchos líderes y numerosos miembros y operan en las principales ciudades de Guatemala. Aunque las disputas territoriales han disminuido en los últimos años, todavía se producen enfrentamientos ocasionales entre estos grupos y las autoridades guatemaltecas en enclaves criminales remotos y en zonas rurales abandonadas a lo largo de la frontera entre Guatemala y México. Estos grupos también se han infiltrado en diversos sectores de la sociedad, como la política, las fuerzas de seguridad, el sector privado y el sistema judicial.

En el sector privado, el Gobierno guatemalteco ha investigado a empresas de seguridad privada por operar ilegalmente sin licencia para portar armas, lo que supone un riesgo para las comunidades. Las empresas mineras transnacionales también causan daños medioambientales, alimentan tramas de corrupción e intentan influir en los líderes indígenas, al tiempo que vigilan a los periodistas que denuncian sus irregularidades. Muchas empresas locales y extranjeras han sido acusadas de blanquear sus ganancias en el país y esta práctica ilícita supone miles de millones de dólares cada año.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

La dirigencia política de Guatemala es ampliamente considerada corrupta, con funcionarios actuales y anteriores vinculados a prácticas corruptas y organizaciones de narcotráfico. El desinterés de la élite por reformar la legislación fiscal ha contribuido a la prolongada deuda del Estado y la falta de reformas críticas en los sistemas de justicia, legal y de seguridad ha permitido el florecimiento de la delincuencia. El crimen organizado y la seguridad pública son los principales temas de campaña en Guatemala, pero las iniciativas contra el crimen organizado han sido en gran medida ineficaces y muchas de ellas necesitan más financiación y continuidad. La falta de instituciones influyentes para abordar la corrupción contribuye a la percepción general sobre la corrupción en el país. El fracaso del Estado a la hora de proteger a los jueces ha contribuido a elevar el estatus de alerta del país en términos de gobernabilidad. En los últimos años, el organismo anticorrupción de Guatemala, respaldado por la ONU, fue abolido y la creación de una nueva comisión nacional presidencial anticorrupción ha sido criticada por estar demasiado cerca del Ejecutivo para ser imparcial. El marco legal de Guatemala permite al público solicitar información sobre cualquier tema que no se considere confidencial, pero los tiempos de respuesta de las instituciones nacionales son lentos. El Gobierno ha hecho esfuerzos para mejorar la transparencia, como la publicación de presupuestos y la creación de plataformas para hacer disponible la información sobre contratación pública. Sin embargo, los contratos en las instituciones estatales carecen de transparencia y hay poca voluntad política de reformar la ley de la función pública para garantizar que las calificaciones laborales y profesionales en el sector público se basen en el rendimiento.

Guatemala ha ratificado varios tratados internacionales sobre crimen organizado, lo que ha dado lugar a reformas legales y mejoras en los esfuerzos contra el crimen organizado. Esto ha repercutido positivamente en las investigaciones sobre la extorsión de las bandas y los cárteles de la droga. El país tiene acuerdos bilaterales de extradición con varios países, incluido Estados Unidos, y ha extraditado a muchos narcotraficantes importantes, incluido un expresidente. Las percepciones sobre los esfuerzos de Guatemala para cooperar en la lucha contra el crimen organizado son positivas, pero la implementación sigue siendo un reto. Guatemala también ha promulgado una serie de leyes e iniciativas legislativas para combatir el crimen organizado, el blanqueo de dinero, la violencia sexual y el tráfico de personas. Sin embargo, existe preocupación sobre la estrategia del Gobierno para enfrentar el crimen, incluidas las iniciativas legislativas que fueron eventualmente bloqueadas por la Corte de Constitucionalidad. La falta de formación adecuada por

parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley también dificulta la aplicación efectiva del marco legal existente.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El Poder Judicial de Guatemala tiene dificultades para gestionar casos complejos, a pesar de recibir fondos de cooperación internacional. La salida del organismo anticorrupción respaldado por la ONU ha dejado vulnerables a las autoridades judiciales y de investigación ante las organizaciones criminales enquistadas en las instituciones estatales y las ha privado de apoyo internacional. De hecho, los ataques contra fiscales y jueces que investigan la corrupción y el crimen organizado han aumentado desde su cierre. Además, el sistema penitenciario es inadecuado y tiene problemas de hacinamiento, corrupción y falta de recursos. El crimen organizado florece en las prisiones y los líderes de las bandas coordinan las actividades ilegales desde dentro.

Guatemala cuenta con varias unidades policiales especializadas en crimen organizado, como la Unidad Antinarcóticos y la Unidad de Investigación Criminal, que han recibido formación y apoyo del Gobierno estadounidense. Sin embargo, estas unidades siguen viéndose afectadas por la escasez de personal, la falta de equipamiento, la corrupción y la mala coordinación con los investigadores. La falta de confianza de la población en la Policía Nacional socava aún más su eficacia. Existen modelos de Policía comunitaria en algunas zonas rurales, pero no hay un seguimiento de su impacto. El sistema de inteligencia de Guatemala es ineficaz, debido a la escasa coordinación entre las unidades de inteligencia policial, militar, civil y estratégica.

Las fronteras de Guatemala con los países vecinos, como México, Honduras, Belice y El Salvador, tienen cientos de puntos ciegos, donde la presencia estatal es escasa o nula. Estos puntos débiles facilitan la entrada y salida del país de contrabando, drogas y personas. La disputa territorial aún activa con Belice y la consiguiente indefinición de la frontera dificultan aún más la capacidad de las autoridades para llevar a cabo operaciones en esa zona. El terreno, que incluye ríos y selvas, hace que el control de las fronteras regionales sea un reto y un control eficaz requeriría importantes inversiones en tecnologías marítimas y aéreas. A pesar de algunos esfuerzos del Gobierno, el personal de control fronterizo sigue siendo corrupto y no está suficientemente equipado y el Gobierno también se enfrenta a problemas de extorsión en las zonas controladas por las bandas.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Guatemala cuenta con el marco legislativo y la capacidad institucional para luchar contra el blanqueo de dinero, pero se han planteado dudas sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas de esta tarea, ya que están financiadas por los bancos. En la práctica, las autoridades judiciales extranjeras siguen llevando a cabo las principales investigaciones, en particular las estadounidenses. Guatemala no figura actualmente en ninguna lista negra o gris; sin embargo, corre el riesgo de figurar en ella, debido a cuestiones reglamentarias que deben reforzarse. El país aún no ha adoptado ninguna regulación o medida para prevenir el uso del crowdfunding ni de las apuestas en línea para el blanqueo de capitales y existe un marco regulatorio débil para las cooperativas de ahorro y crédito.

El entorno normativo económico de Guatemala se caracteriza por una extorsión generalizada, que afecta a las pequeñas y medianas empresas, incluidas las multinacionales. La llevan a cabo bandas y organizaciones de imitadores y la debilidad del sistema de aplicación de la ley, unida a la falta de confianza en las capacidades de aplicación de la ley, agrava el problema. La delincuencia organizada diversifica las actividades empresariales existentes o crea empresas legítimas para aumentar sus beneficios, blanquear dinero o entrar en la esfera legal, sobre todo en los sectores agrícola y minero. El contrabando de mercancías se alimenta de la evasión fiscal y arancelaria y ciertas restricciones comerciales propician el comercio ilícito. El entorno económico de Guatemala también sigue estando muy regulado, por lo que hacer negocios en el país resulta engorroso.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Los servicios de apoyo a las víctimas en Guatemala son insuficientes, pero existen algunos programas para ayudar a víctimas y testigos. El ministerio público cuenta con una unidad de apoyo a las víctimas y un programa de protección de testigos y el Gobierno ha creado recientemente un instituto para las víctimas. Sin embargo, estos programas carecen de transparencia y el débil marco institucional del país crea un clima de impunidad que disminuye la eficacia de las iniciativas de apoyo a las víctimas. El uso de «colaboradores eficaces» como testigos solo se ha implantado recientemente en los grandes casos de corrupción o en los relacionados con líderes de bandas y narcotraficantes y los testigos claves son internados en centros especiales. Además, los consumidores de drogas suelen ser tratados como delincuentes y no como víctimas y los recursos para tratar la adicción son limitados. La sociedad civil presta algunos servicios de apoyo a las víctimas, como asesoramiento jurídico y tratamientos psicológicos, y existen líneas directas anónimas para denunciar delitos.

La prevención de la delincuencia se centra en la prevención situacional y en iniciativas dirigidas a las bandas, la afiliación y la extorsión. Aunque las estrategias se publicaron hace algunos años, aún no se han determinado los resultados

específicos ni el seguimiento y la evaluación. En general, el programa de prevención de la delincuencia es débil, con resultados limitados, debido a las estrategias de aplicación de la ley de línea dura y a la evolución política. Existen campañas de sensibilización pública, centradas en la trata de seres humanos, el contrabando y la actividad de las bandas, pero el Gobierno carece de transparencia y de una comunicación eficaz entre las instituciones responsables de la prevención de la delincuencia.

Guatemala se enfrenta a importantes retos en materia de libertad de prensa y de derechos humanos, con un elevado número de agresiones a periodistas y activistas de derechos humanos. La propiedad de los medios de comunicación está muy concentrada y a menudo carece de imparcialidad. El Gobierno presta un apoyo limitado a los grupos de reflexión y a las iniciativas de la sociedad civil dirigidas a hacer frente a la delincuencia organizada y existe una falta de coordinación entre las autoridades y las ONG que ayudan a las víctimas. Los indígenas constituyen casi la mitad de la población y están marginados a nivel social y político. El Gobierno está intentando modificar las leyes que rigen a las ONG, para aumentar el control sobre ellas. La pandemia de la COVID-19 ha empeorado la situación en Guatemala, dificultando el acceso a información fidedigna y creando un clima desfavorable para los periodistas. Los activistas de derechos humanos han sufrido ataques y Guatemala es el cuarto país de la región con mayor número de asesinatos de defensores de los derechos humanos.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.